



Asamblea General

Distr. general
12 de noviembre de 2019
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
35º período de sesiones
20 a 31 de enero de 2020

Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Turquía*

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

I. Antecedentes

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 16/21, teniendo en cuenta la periodicidad del examen periódico universal. Constituye un resumen de las comunicaciones de 100 partes interesadas¹ para el examen periódico universal, presentadas de forma resumida debido a las restricciones relativas al número de palabras.

II. Información proporcionada por las partes interesadas

A. Alcance de las obligaciones internacionales² y cooperación con los mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos³

2. Varias partes interesadas recomendaron a Turquía que ratificara la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas⁴. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Human Rights Agenda Association (HRAA) instaron a Turquía a que ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁵. La HRAA, Human Rights Watch (HRW), la CIJ, la JS3 y la JS48 instaron a Turquía a que ratificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional⁶. La HRAA recomendó a Turquía que ratificara los Elementos de los Crímenes, las Reglas de Procedimiento y Prueba, y los documentos sobre privilegios e inmunidades adjuntos al Estatuto de Roma⁷.

3. La JS3 y la JS45 recomendaron a Turquía que ratificara la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)⁸. HRW, la JS40 y la JS45 recomendaron a Turquía que ratificara el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de las minorías⁹. La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviada a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.



(ICAN) recomendó a Turquía que firmara y ratificara el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de las Naciones Unidas¹⁰. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) reiteró su recomendación a las autoridades turcas de que ratificaran el Protocolo núm. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos¹¹.

4. HRW, la Association for Monitoring Equal Rights (ESHID) y la JS33 recomendaron a Turquía que retirara la reserva al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹². La HRAA y la ESHID recomendaron a Turquía que retirara las reservas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que retirara asimismo todas las reservas y declaraciones formuladas con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La HRAA y la JS3 recomendaron a Turquía que retirara la reserva con respecto al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones¹³.

5. HRW, la HRAA y la JS48 recomendaron a Turquía que retirara la limitación geográfica al Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951¹⁴. La JS37 recomendó a Turquía que se adhiriera a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961¹⁵.

6. KYM Internacional (KYM) recomendó a Turquía que invitara a visitar el país al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas¹⁶. La Fundación SERA (SERA) y la JS22 recomendaron a Turquía que autorizara una visita oficial del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad y del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo¹⁷.

B. Marco nacional de derechos humanos¹⁸

7. Amnistía Internacional (AI) señaló que Turquía no había avanzado en la aplicación de muchas de las recomendaciones aceptadas durante su anterior examen periódico universal, y que, durante los dos años del estado de emergencia, se había producido un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos¹⁹.

8. Muchas partes interesadas observaron que, tras el intento fallido de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, se declaró un estado de emergencia durante un período de tres meses, que el Gobierno prorrogó en siete ocasiones, hasta el 18 de julio de 2018. Bajo los auspicios del estado de emergencia, el Gobierno introdujo una serie de modificaciones legales por medio de decretos leyes de emergencia (aproximadamente 32), pasando por alto el procedimiento legislativo ordinario, lo que dio lugar a cambios permanentes en el marco jurídico y en el sistema de gobierno, así como en el modelo de gobernanza democrática. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que derogara todas las leyes y decretos promulgados en el marco del estado de emergencia, así como otras disposiciones jurídicas que restringían arbitrariamente los derechos humanos, incluida la Ley núm. 7145²⁰.

9. Algunas partes interesadas señalaron que el Defensor del Pueblo y la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía no cumplían los criterios de los Principios de París ni las recomendaciones políticas generales núms. 2 y 7 de la ECRI, en lo tocante a su estatuto, su estructura, sus funciones, sus actividades, la independencia financiera y de funcionamiento, la independencia y la elegibilidad de los miembros de sus juntas, y su composición, por lo que recomendaron a Turquía que revisara la legislación por la que se creaban dichas instituciones²¹. La ECRI expresó preocupaciones análogas y formuló recomendaciones similares²².

10. Muchas partes interesadas recomendaron a Turquía que cumpliera las obligaciones que le incumbían en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruces, Inhumanos o Degradantes, mediante la creación de un

mecanismo nacional de prevención que se encargara de realizar visitas periódicas y *ad hoc* sin previo aviso a todos los lugares de detención²³.

11. La ECRI reiteró su recomendación de que Turquía asignara a un órgano totalmente independiente de la policía, otras fuerzas de seguridad y el ministerio público la investigación de los presuntos casos de conducta indebida por parte de sus miembros, en particular los malos tratos, dando al Defensor del Pueblo un mandato claro para que se ocupara de esa cuestión²⁴. La JS8 y la JS39 recomendaron a Turquía que impartiera capacitación en materia de derechos humanos a los agentes del orden, los miembros del personal penitenciario, los jueces y los fiscales²⁵.

C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable

1. Cuestiones transversales

*Igualdad y no discriminación*²⁶

12. La JS30 observó que los kurdos seguían sufriendo diversas formas de discriminación²⁷. La ECRI recomendó que las autoridades retiraran de los libros de texto todo material racista o que fomentara los estereotipos, la intolerancia o los prejuicios contra los grupos minoritarios. Recomendó asimismo que los funcionarios y los dirigentes políticos en todos los niveles dejaran de emplear el discurso de odio²⁸.

13. La ESHID y la JS2 señalaron que, a pesar de que en el ciclo del examen periódico universal de 2015 Turquía había apoyado las recomendaciones sobre la aprobación de una ley integral de lucha contra la discriminación, no se había producido ningún avance desde entonces²⁹. HRW y la JS8 recomendaron a Turquía que aprobara una ley integral contra la discriminación³⁰. La ECRI recomendó a Turquía que incluyera en el Código Penal una prohibición de la discriminación por motivos de origen étnico, color, idioma, ciudadanía, orientación sexual e identidad de género, con el fin de combatir el racismo, la homofobia y la transfobia; y que suprimiera la restricción prevista en el artículo 216³¹.

14. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) observó que las fuerzas del orden de Turquía no habían tomado nota de los prejuicios en los que se basaban los delitos de odio³². La JS2 y la JS27 señalaron que la violencia de género, el discurso de odio contra los grupos desfavorecidos, los delitos de odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI+ seguían suscitando una gran preocupación, y recomendaron que no se utilizaran las disposiciones de “orden público”, “salud pública” y “moral pública” contra los defensores de los derechos de las personas LGBTI+, y que se condenara la violencia y la discriminación contra ellos³³.

*Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos*³⁴

15. Algunas partes interesadas señalaron que la confiscación de los activos de casi 942 empresas, alegando que estuvieron supuestamente involucradas en el intento fallido de golpe de Estado, vulneró el derecho a la propiedad (durante el estado de emergencia, se cerraron mediante decretos leyes 1.767 fundaciones, sindicatos y federaciones, y también se cerraron 109 residencias, 934 escuelas privadas, 15 universidades, 49 instituciones médicas, 15 agencias de noticias, 20 canales de televisión, 25 radios, 70 periódicos, 20 revistas y 29 editoriales); en su conjunto tenían un patrimonio neto de 20.000 millones de dólares, entre bienes y acciones, que, mediante decretos leyes, fueron confiscados y transferidos a los “administradores” del Fondo de Garantía de los Depósitos de Ahorro. El Gobierno también confiscó los activos de una serie de organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones de educación superior, fundaciones, empresas, obras de beneficencia y sindicatos, con el argumento de que eran propiedades del movimiento de Gülen, considerado como una organización terrorista. Los procedimientos de investigación y confiscación de los activos no contaron con una decisión judicial clara. Estas partes interesadas recomendaron a Turquía que se devolvieran todos los bienes y se concedieran

indemnizaciones³⁵. La JS7 y el Blue Tulip Human Rights Center (BTHRC) señalaron que el Fondo de Garantía de los Depósitos de Ahorro había confiscado injustamente las cuentas y los activos del Banco Asya, los depositantes y los accionistas, poniendo en peligro la independencia del poder judicial y violando el derecho a la propiedad y los datos personales³⁶.

16. KYM señaló que Turquía había vulnerado sus derechos en virtud de la Ley de Libertad de Información, ya que se le había denegado el acceso a los expedientes de sus casos, tras poner fin a sus actividades de ayuda y congelar sus cuentas bancarias sin aprobación judicial ni justificación legal³⁷.

*Derechos humanos y lucha contra el terrorismo*³⁸

17. AI observó que Turquía había aceptado una serie de recomendaciones, en particular la de asegurar que el Código Penal y la Ley de Lucha contra el Terrorismo se ajustaran a sus obligaciones internacionales. Después del intento de golpe de Estado, un total de 44.690 personas habían sido encarceladas por cargos relacionados con el “terrorismo”, entre ellas periodistas, activistas políticos, abogados, académicos (incluidos los que firmaron un llamamiento a la paz en 2016) y defensores de los derechos humanos, lo que excedía ampliamente el propósito legítimo de investigar a los responsables y llevarlos ante la justicia³⁹.

18. El Comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos (el Comisario) señaló que algunas disposiciones penales sobre la seguridad del Estado y el terrorismo podían dar lugar a una aplicación arbitraria, debido a su formulación vaga y a una interpretación demasiado amplia de los conceptos de propaganda terrorista y apoyo a una organización terrorista, que abarcaban a personas y declaraciones que claramente no incitaban a la violencia⁴⁰. Varias partes interesadas señalaron que algunas disposiciones de la Ley núm. 3713, relativas a la pertenencia a organizaciones terroristas y a la propaganda de apoyo a esas organizaciones, no definían los actos que se considerarían actos de terrorismo, y había otros conceptos fundamentales que carecían de definición. La Ley núm. 7145 había introducido modificaciones a una serie de leyes durante un período de tres años, incluida la Ley de Lucha contra el Terrorismo núm. 3713. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que modificara el artículo 220 8) del Código Penal, así como los artículos 314 y 220 7), para evitar la vulneración del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión⁴¹. Algunas partes interesadas recomendaron también a Turquía que armonizara las leyes de lucha contra el terrorismo con las normas internacionales y europeas de derechos humanos, a fin de asegurar que se dispusiera de una definición precisa de los “actos terroristas”, modificando la definición de “terrorismo” del artículo 1 y la de delincuente “terrorista”, y derogando o modificando los artículos 6/2 y 7/2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo⁴². El Istanbul Bar Association Human Rights Centre (IBAHRC) informó de que se había restringido el derecho de visitas de las personas acusadas de delitos previstos en la Ley núm. 3713; y de que se les había denegado el acceso a los servicios de salud y a los espacios comunes de las prisiones⁴³.

19. El Comisario señaló que las operaciones de lucha contra el terrorismo realizadas en el sudeste de Turquía carecían de una base jurídica suficiente y se caracterizaban por el uso excesivo de la fuerza. El Comisario instó a que se ejecutaran las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁴⁴.

2. Derechos civiles y políticos

*Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona*⁴⁵

20. La JS29 expresó su preocupación por las declaraciones de que se reinstauraría la pena de muerte con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Recomendó a Turquía que respetara las obligaciones que le incumbían en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte⁴⁶.

21. La Human Rights Association (AHD/IHD), la JS30 y la Human Rights Foundation of Turkey (HRFT) informaron de que, entre agosto de 2015 y de 2016, al menos 321 civiles habían sido asesinados durante los toques de queda y los conflictos. La gran mayoría de las

investigaciones no dieron lugar a un enjuiciamiento. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que realizara investigaciones eficaces de las denuncias graves de violaciones del derecho a la vida⁴⁷.

22. El Comisario observó que se habían vulnerado numerosos derechos humanos de una gran población del sudeste de Turquía, en el contexto de las operaciones de lucha contra el terrorismo llevadas a cabo desde agosto de 2015⁴⁸. La ECRI recomendó a las autoridades turcas que velaran por la seguridad de los civiles, y por que los heridos recibieran tratamiento médico durante las operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)⁴⁹. La JS32 y la JS42 recomendaron a Turquía que pusiera fin a los secuestros y las desapariciones forzadas, y que velara por que los autores de esos delitos rindieran cuentas por ellos y por que se permitiera que las personas tomadas por la fuerza regresaran al lugar donde habían sido secuestradas⁵⁰.

23. Advocates for Dignity (AFD), la JS12 y la JS47 recomendaron a Turquía que condenara la tortura y los malos tratos, y que exigiera responsabilidades a quienes practicaban la tortura⁵¹. La HRFT recomendó a Turquía que asegurara que se realizaran investigaciones de conformidad con el Protocolo de Estambul, y que se estableciera una dependencia independiente para investigar las denuncias contra los sospechosos de haber cometido actos de tortura⁵².

24. Muchas partes interesadas señalaron que los miembros del “movimiento de Gülen” habían sido objeto de una intensa vigilancia y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, que más de 50.000 personas habían sido detenidas y que algunas de ellas habían sido sometidas a torturas⁵³. Small Media (SM) indicó que habían sido detenidos por su presunto uso de ByLock, una aplicación de comunicaciones cifradas⁵⁴. Advocates for Human Rights (AHR), la JS4, la JS12 y la JS39 recomendaron a Turquía que revisara los artículos 23, 25 y 115 de la Ley núm. 5275, a fin de limitar el uso de la reclusión en régimen de aislamiento a las condiciones previstas en las Reglas Nelson Mandela, y que aprobara normas jurídicas que salvaguardaran las necesidades básicas de las reclusas, de conformidad con las Reglas de Beijing de las Naciones Unidas⁵⁵. Las partes interesadas señalaron que existía hacinamiento en las cárceles⁵⁶.

25. AFD, The Arrested Lawyers Initiative (ALI) y la JS12 informaron de que, desde el fallido golpe de Estado, aproximadamente 1.546 abogados habían sido enjuiciados, 599 habían sido arrestados y detenidos arbitrariamente, y que incluso sus abogados habían sido asimismo detenidos o sufrido intimidación. Se habían cerrado los colegios de abogados y las asociaciones de juristas, y 14 de los abogados detenidos eran presidentes (o antiguos presidentes) de sus respectivos colegios de abogados provinciales, y había 311 abogados condenados y sentenciados⁵⁷.

*Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho*⁵⁸

26. Varias partes interesadas observaron que había habido una escalada de la tortura y la violencia contra los detenidos y, al mismo tiempo, el personal de seguridad que pudo haber cometido delitos en nombre del Gobierno había gozado de inmunidad de enjuiciamiento durante el intento de golpe de Estado y posteriormente. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que derogara toda disposición que concediera inmunidad retroactiva de cualquier responsabilidad jurídica, administrativa, financiera o penal relacionada con la comisión de actos de tortura u otros malos tratos, en particular los Decretos Leyes de Emergencia núms. 667 (art. 9 1), 2016), 668 (art. 37) y 696 (art. 121), y los artículos conexos de la Ley núm. 4483⁵⁹. El Comisario instó a Turquía a que abordara las numerosas causas fundamentales de la impunidad en el país⁶⁰.

27. Varias partes interesadas señalaron que, en mayo de 2017, el Gobierno estableció la “Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Emergencia” (la Comisión), mediante el Decreto-Ley núm. 685, con el propósito de que se evaluaran las reclamaciones relativas a los actos administrativos llevados a cabo en virtud de los decretos leyes, durante el estado de emergencia, incluidas las apelaciones por el despido de más de 130.000 empleados y funcionarios públicos posterior al intento de golpe de Estado. La ineficacia de esta Comisión había dado lugar a que decenas de miles de personas no

podrían acceder a la justicia y a una reparación de manera efectiva, ya que solo se habían aceptado las reclamaciones de 7.600 de ellas⁶¹. La Comisión de Venecia expresó su preocupación por los derechos básicos del debido proceso administrativo de los funcionarios públicos destituidos mediante los decretos leyes⁶². La JS25 recomendó a Turquía que modificara el marco de las magistraturas penales de paz⁶³.

28. AFD, la Platform for Peace and Justice (PPJ), la JS17 y la JS49 observaron que ya antes del intento de golpe de Estado y el posterior estado de emergencia existía una creciente preocupación por la imparcialidad del poder judicial en Turquía. Desde el intento de golpe de Estado, se habían adoptado medidas drásticas para modificar las leyes y la estructura legislativa⁶⁴.

29. Muchas partes interesadas observaron que se había producido una ampliación del poder ejecutivo sobre el poder judicial. El sistema de justicia carecía de una independencia o una imparcialidad significativas. Señalaron que, en 2019, entraron en vigor una serie de modificaciones jurídicas, mediante decretos leyes de emergencia, que facultaban al Presidente a nombrar directamente a los miembros del poder judicial, cuya aplicación había sido inmediata. En el poder judicial había sido cesado todo funcionario considerado oponente del Gobierno, y se designó para esas sustituciones a personas favorables al Gobierno. Hasta el 20 de marzo de 2018, se había destituido sumariamente a 4.239 jueces y fiscales, 165 miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo de Cuentas Públicas, 6 miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, y 2 miembros del Tribunal Constitucional; 3.500 de ellos habían sido detenidos, y al menos 600 jueces y fiscales habían permanecido en régimen de aislamiento, lo que hacía temer represalias por parte de aquellos profesionales que aún estaban en el cargo. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que se abstuviera de adoptar medidas contrarias a la separación de poderes y garantizara la independencia del poder judicial; prohibiera la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial o los intentos de ejercer influencia en él; modificara la legislación a fin de que los nombramientos en el poder judicial respetaran los principios de independencia e imparcialidad; y autorizara la presentación de denuncias individuales ante el Tribunal Constitucional contra las decisiones del Consejo de Jueces y Fiscales⁶⁵. La CIJ y la PPJ recomendaron a Turquía que derogara el artículo 26 de la Ley núm. 7145, que ampliaba las facultades excepcionales con respecto a los jueces y fiscales durante tres años más⁶⁶.

Libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública y política⁶⁷

30. Las JS4, la JS12 y la JS33 señalaron que el intento de golpe de Estado había tenido consecuencias duraderas para la libertad religiosa. Turquía había culpado e identificado a todos los seguidores de Fetullah Gülen como miembros de una organización terrorista. En la actualidad, aproximadamente una quinta parte de la población reclusa, esto es, más de 260.000 personas, había sido acusada o condenada por delitos de terrorismo⁶⁸.

31. La JS31 y la JS41 observaron que se había eliminado la afiliación religiosa de las personas en los carnés de identidad nacionales; sin embargo, esa información se seguiría registrando en un chip, lo que haría que las personas fueran vulnerables a la discriminación⁶⁹. La JS40 instó a Turquía a que considerara la posibilidad de que la condición de minoría también incluyera a los asirios, los caldeos, los protestantes y otros no musulmanes⁷⁰. Varias partes interesadas señalaron que las restricciones a la libertad religiosa y la persecución por motivos de religión habían aumentado desde el golpe de Estado de 2016. Las leyes no consideraban a los alevíes, los protestantes, los sirios, los testigos de Jehová, los bahá'íes y a las nuevas religiones como minorías religiosas. Los medios de comunicación públicos discriminaban a las religiones minoritarias, que habían sido consideradas como agentes de Occidente, que, según el Gobierno, podrían haber estado involucrados en el golpe de Estado⁷¹.

32. La ECRI recomendó a las autoridades que respetaran estrictamente su deber de neutralidad e imparcialidad en la regulación de los asuntos religiosos, abolieran las normas y prácticas discriminatorias a ese respecto, y aceleraran la aplicación de las decisiones conexas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁷².

33. Varias partes interesadas señalaron que no estaba prevista la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Elogiaron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recomendaron a Turquía que derogara el artículo 318 del Código Penal de Turquía (Ley núm. 5237); así como que reconociera la objeción de conciencia⁷³.

34. Varias partes interesadas observaron que la libertad de expresión se había deteriorado gravemente. La represión del espacio cívico y de la libertad de los medios de comunicación, y la purga de las voces disidentes, que se intensificaron tras el intento fallido de golpe de Estado, seguían en curso, especialmente en relación con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de medios de comunicación. El marco de la lucha contra el terrorismo se había empleado para restringir la libertad de expresión, y había facilitado los ataques arbitrarios contra periodistas, activistas y voces de la oposición, en particular en el sudeste del país. El Gobierno había desmantelado los medios de comunicación libres e independientes⁷⁴. La Comisión de Venecia observó que la supresión masiva de los medios de comunicación mediante decretos leyes de emergencia era incompatible con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos⁷⁵.

35. Varias partes interesadas subrayaron la necesidad de que Turquía realizara una revisión completa del Código Penal, y señalaron que, en la actualidad, el art. 299 era uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión. Recomendaron a Turquía que revisara la legislación vigente, en particular los artículos 125 (difamación), 215 (apología de un delito o de un delincuente), 216 (incitación al odio), 220 6) (comisión de un delito en nombre de una organización delictiva) y 220 7) (complicidad con una organización delictiva), 285 y 288 (confidencialidad de las investigaciones e intentos de influir en el poder judicial), 299 (insultos al Presidente), 301 (insultos a la nación turca o instituciones del Estado), 314 (pertenencia a una organización armada) y 318 (disuadir a personas de prestar el servicio militar). Ello debería tener plenamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el dictamen pertinente de la Comisión de Venecia. De forma análoga, recomendaron a Turquía que revisara el artículo 7 2) de la Ley de Lucha contra el Terrorismo (propaganda en nombre de una organización terrorista), y velara por que las exigencias políticas de la guerra contra el terrorismo no eclipsaran la necesidad de proteger los derechos civiles y políticos, y a la sociedad civil⁷⁶.

36. Varias partes interesadas observaron que el encarcelamiento de periodistas no solo los silenciaba, sino que también privaba a los ciudadanos turcos de su derecho a tener acceso a opiniones plurales sobre cuestiones que podrían afectar sus vidas. El 29 de abril de 2017, el Gobierno de Turquía había prohibido el acceso a todas las versiones lingüísticas del sitio web de Wikipedia, tras negarse a retirar un artículo que alegaba el apoyo del Gobierno turco a los grupos terroristas, según las autoridades turcas⁷⁷.

37. Varias partes interesadas señalaron que 18 sindicatos acusados de estar afiliados a la Fethullahist Terrorist Organization (“movimiento de Gülen”) habían sido cerrados y se habían confiscado todos sus bienes, contraviniendo los Convenios núm. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recomendaron a Turquía que derogara la legislación y los decretos aplicados en el marco del estado de emergencia, y que derogara la Ley núm. 2911⁷⁸. La JS44 observó que la actividad sindical, incluido el derecho de huelga, estaba limitada por la ley y en la práctica⁷⁹.

38. KYM recomendó a Turquía que tomara todas las medidas necesarias y adoptara medidas jurídicas para impedir el castigo de los miembros de la sociedad civil, así como para evitar y combatir de inmediato las actitudes hostiles contra los miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al movimiento de Gülen, los kurdos y los alevíes, y a las minorías no musulmanas⁸⁰.

39. El Comisario destacó que los procedimientos penales propiciaban un clima de temor entre el gran número de personas que participaban pacíficamente en las manifestaciones, y desalentaban el ejercicio del derecho de reunión pacífica⁸¹.

40. La Stiftung Dialog und Bildung (SDuB) señaló que las asambleas de todos los grupos opositores (como los grupos políticos kurdos, de personas LGBT, izquierdistas y del movimiento de Gülen) estaban estrictamente restringidas o prohibidas⁸². La Omega Research Foundation (ORF) recomendó a Turquía que, de conformidad con las normas

internacionales de derechos humanos, regulara el uso de la fuerza en todas las situaciones, incluidos los lugares de detención y durante reuniones públicas⁸³.

41. La ESHID observó que la legislación electoral de Turquía aún no estaba plenamente en concordancia con las normas internacionales, lo que impedía una representación justa y la creación de un entorno político pluralista⁸⁴. La OSCE/OIDDH recomendó a Turquía que modificara la legislación vigente para subsanar las principales deficiencias, y que armonizara todas las leyes relacionadas con las elecciones, a fin de proporcionar un marco coherente⁸⁵.

*Prohibición de todas las formas de esclavitud*⁸⁶

42. La JS34 señaló que la trata de personas con fines de explotación sexual era la principal forma de trata en Turquía, que era un país de destino y de tránsito de niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Informó de que no se había avanzado en la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal apoyadas para luchar contra la trata de niños, y para proteger a las víctimas. Recomendó que Turquía adoptara disposiciones jurídicas para tipificar como delito todas las formas de explotación sexual de los niños, de conformidad con las normas jurídicas internacionales, en particular la explotación sexual en la prostitución, en el turismo y la industria de viajes, y en línea⁸⁷.

*Derecho a la intimidad y a la vida familiar*⁸⁸

43. La JS7 y el BTHRC informaron de que todos los datos personales de los depositantes del Banco Asya habían sido confiscados sin una decisión judicial, violando el derecho a la privacidad de los clientes, protegido por la Ley⁸⁹. London Advocacy (LAG) y la JS26 recomendaron a Turquía que modificara la Ley de la Agencia Nacional de Inteligencia (núm. 6532), y que asegurara una supervisión judicial y política adecuada de los servicios de seguridad⁹⁰. SM señaló que, a pesar de que el derecho a la intimidad estaba protegido por la Constitución, los artículos posteriores lo limitaban, permitiendo la interceptación de las comunicaciones. Ello había permitido la vigilancia del Gobierno tras el intento de golpe de Estado. Recomendó a Turquía que modificara la Ley núm. 5651 a fin de proteger el derecho a la intimidad en línea⁹¹.

3. Derechos económicos, sociales y culturales

*Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias*⁹²

44. Varias partes interesadas indicaron que al menos 152.000 funcionarios públicos habían sido despedidos; de ellos, 107.944 formaban parte de las listas de expulsión adjuntas al *Kanun Hükmünde Kararname* (Decreto-Ley sobre el Estado de Emergencia), y fueron detenidos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado. El cierre de instituciones privadas, como fundaciones, sindicatos y empresas de medios de comunicación, dio lugar al despido de 22.474 personas⁹³. La Asociación Educación, Social y Cultural Sol Naciente (ASOCSOLNAC), AI, la European Professionals Network (EPN), la JS3 y la JS40 señalaron que 120.000 empleados no habían podido revocar su despido, y que además habían sido señalados públicamente como vinculados a organizaciones “terroristas”, en listas anexas a decretos ejecutivos, sin ninguna justificación individualizada, y se habían cancelado sus pasaportes. Muchos de ellos se enfrentaban a la pobreza y a un tremendo estigma social. A algunos de ellos se les había impedido totalmente el acceso a sus profesiones. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que derogara la Ley núm. 7145 y readmitiera a los trabajadores del sector público, y que solo procediera al despido tras haber aplicado un procedimiento disciplinario con plenas garantías procesales⁹⁴. Algunas partes interesadas señalaron que, después del intento de golpe de Estado, se habían ampliado las graves restricciones impuestas a la libertad de circulación, incluida la cancelación de más de 230.000 pasaportes mediante decisiones administrativas, lo que había dado lugar a tratamientos arbitrarios sistemáticos⁹⁵.

45. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Sindicato Unificado de Trabajadores Metalúrgicos, DİSK) recomendó a Turquía que modificara la legislación sindical para que todos los sindicatos pudieran elegir libremente los sectores en los que deseaban organizarse, y para

que los trabajadores pudieran afiliarse a cualquier sindicato de su elección, sin ninguna restricción sectorial⁹⁶.

*Derecho a la seguridad social*⁹⁷

46. La JS38 señaló una serie de casos en los que las personas no habían sido tratadas conforme a la ley en relación con la jubilación de la seguridad social, entre otras cosas, desde el 15 de julio de 2016. Muchas de las personas que habían prestado servicios en cargos públicos durante una serie de años, como académicos, soldados, policías o docentes, habían sido despedidas sin ninguna justificación concreta y sin derecho a percibir una pensión, privándoles de un pago por separación del servicio y de las prestaciones por jubilación. La JS38 recomendó a Turquía que pusiera fin a las privaciones de las víctimas, concediendo a todas las personas el derecho a la seguridad social, en particular, los derechos relacionados con la jubilación, y que abandonara esas prácticas ilícitas y arbitrarias⁹⁸.

*Derecho a un nivel de vida adecuado*⁹⁹

47. La JS3, la JS21 y la JS46 señalaron que el despido arbitrario de funcionarios públicos vulneraba su derecho al trabajo, y amenazaba gravemente su derecho a un nivel de vida adecuado. En toda Turquía, había grandes pancartas exhibidas en oficinas públicas, otros establecimientos públicos, restaurantes y distintos tipos de tiendas, que decían: “No se permite la entrada a los *paralelos* ni a los simpatizantes de los *paralelos* [Movimiento Hizmet]”. Toda persona que figurara en las listas de los decretos leyes se enfrentaba a la discriminación en la comunidad, la pérdida de oportunidades de empleo y la imposibilidad de participación social. Los trabajadores del sector público despedidos no podían, por decreto, trabajar en empresas de seguridad privada, lo que, en la práctica, prohibía que los policías y militares despedidos se emplearan en trabajos o sectores análogos en el sector privado. Junto con sus familias, los funcionarios despedidos también habían perdido sus viviendas y las prestaciones de atención de la salud vinculadas a su anterior trabajo. Incapaces de ganarse la vida, también se les ha impedido buscar empleo en el extranjero, ya que los decretos también cancelaron sus pasaportes, lo que amenazaba gravemente la supervivencia de sus familias¹⁰⁰.

*Derecho a la salud*¹⁰¹

48. La JS21 observó que a los funcionarios públicos despedidos se les había impedido disfrutar de sus derechos en materia de salud¹⁰².

49. La JS3 señaló que las medidas adoptadas contra los presuntos miembros del Movimiento Hizmet habían tenido efectos adversos para su salud y la de sus familiares, en particular para las mujeres y los niños. El Gobierno había suprimido las prestaciones sociales y de discapacidad de los cónyuges o los hijos de progenitores detenidos o privados de libertad por presuntos vínculos con dicho movimiento. A los hijos de las personas consideradas cercanas a ese movimiento se les negaba rutinariamente los servicios de atención de la salud en los hospitales y otros centros de salud¹⁰³.

50. La JS35 recomendó a Turquía que elaborara un plan de estudios integral y modificara el artículo 6 de la Ley de Planificación Familiar, a fin de eliminar la disposición sobre el “permiso” de los maridos o tutores para practicar un aborto¹⁰⁴.

*Derecho a la educación*¹⁰⁵

51. La Stichting Witboek (Witboek) señaló que los efectos más perjudiciales de los decretos presidenciales podían observarse en el ámbito de la educación. Esos decretos leyes habían dañado los servicios educativos en cuestiones fundamentales y, tras el intento de golpe de Estado, muchos docentes y estudiantes se habían visto profundamente afectados¹⁰⁶. La Scholars at Risk Network (SAR) y la JS43 pidieron a otros Estados que ampliaran las protecciones para los estudiantes refugiados procedentes de Turquía¹⁰⁷.

52. Muchas partes interesadas señalaron que, tras el intento de golpe de Estado, se habían cerrado las instituciones educativas privadas que se sabía que estaban próximas al movimiento de Gülen, se habían confiscado todos sus bienes muebles, edificios,

instalaciones y bienes, y se habían transferido sus propiedades a la Fundación Maarif. Un total de 54.350 docentes, 10.864 auxiliares y 5.342 académicos que trabajaban en el sector de la enseñanza privada fueron despedidos de sus funciones, lo que incumplía el Convenio núm. 158 de la OIT. Instaron a Turquía a que pusiera fin a los ataques contra la educación, tanto en el país como en el extranjero, y a que revirtiera todas las medidas legales y prácticas¹⁰⁸.

53. Muchas partes interesadas informaron de que más de 138.000 estudiantes y progenitores estaban en la lista negra, lo que los exponía a acusaciones de pertenencia a una organización terrorista. Mediante el Decreto-Ley de emergencia núm. 672 se cerraron por la fuerza universidades e instituciones de enseñanza superior, 15 universidades, 934 jardines de infancia, escuelas secundarias, 109 residencias de estudiantes, 104 fundaciones, 1.125 asociaciones y 19 sindicatos, sin órdenes judiciales ni investigaciones, y se confiscaron sus bienes, alegando que se trataba propiedades del movimiento de Gülen, considerado como una organización terrorista¹⁰⁹.

54. La JS24 instó a Turquía a que eliminara la brecha de género en la enseñanza secundaria, diera prioridad a la educación de las niñas en las zonas rurales y renovara los materiales educativos y los libros de texto gratuitos para que incluyeran discursos no discriminatorios, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO¹¹⁰.

4. Derechos de personas o grupos específicos

*Mujeres*¹¹¹

55. Varias partes interesadas informaron de que había más de 10.000 mujeres en las cárceles turcas, en su mayoría acusadas de tener vínculos con el movimiento de Gülen o de ser kurdas desde el punto de vista étnico. Recomendaron a Turquía que velara por que no se detuviera a ninguna persona sin sospechas fundadas, como por ser miembros de la familia. Informaron de que se habían producido detenciones de mujeres embarazadas y que habían dado a luz recientemente, y del aumento de la violencia contra ellas, así como del número de muertes entre ellas. Instaron a Turquía a que las dejara en libertad, pusiera fin a la práctica de detenerlas justo antes o inmediatamente después de que dieran a luz, y mejorara sus condiciones de reclusión, en particular, la atención de la salud y la higiene¹¹².

56. La Comisión de Venecia acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Turquía, al reconocer que la prevención de la violencia contra las mujeres era una cuestión prioritaria en el programa de políticas¹¹³. El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) instó a Turquía a que asegurara una respuesta rápida e imparcial en los casos de violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres¹¹⁴.

57. La Women Entrepreneurs Association of Turkey (KAGIDER), HRW y la JS40 señalaron que la violencia contra las mujeres seguía siendo un motivo de grave preocupación, ya que Turquía no cumplía las obligaciones en materia de igualdad de género que le incumbían en virtud de las convenciones y los mecanismos internacionales. El discurso de los valores sociales y nacionales había prevalecido, en contra del compromiso con la igualdad y los derechos humanos. Informaron sobre los casos de violencia, en particular de las muertes debidas a la violencia doméstica y los denominados asesinatos por "honor". Recomendaron a Turquía que modificara el Código Penal, pusiera fin a la violencia contra las mujeres y prohibiera la mediación entre las mujeres y los agresores¹¹⁵.

58. La KAGIDER señaló que la participación de las mujeres en la vida económica, política y social no había aumentado lo suficiente como para asegurar el empoderamiento general de las mujeres. La mayoría de los objetivos a ese respecto del Plan de Acción Nacional sobre la Igualdad de Género 2015-2020 todavía tenían que alcanzarse. Observó que la participación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas era baja, y que el entorno local no era propicio para las mujeres. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo era del 34 %, siendo la más baja de los países de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); además, las mujeres no estaban empoderadas económicamente¹¹⁶.

*Niños*¹¹⁷

59. La JS47 informó de que 743 niños de entre 0 y 6 años y 343 niños de entre 0 y 3 años vivían en prisiones¹¹⁸. La JS24 y la JS48 recomendaron a Turquía que elevara la edad de responsabilidad penal, como mínimo, a los 15 años de edad¹¹⁹.

60. La JS24, la JS34 y la JS48 señalaron que, a pesar de haber ratificado numerosos convenios internacionales que protegían los derechos del niño y de haber apoyado 33 recomendaciones del segundo ciclo del examen periódico universal relativas a los niños, los derechos del niño no se habían integrado plenamente en la legislación nacional¹²⁰. La JS48 recomendó a Turquía que armonizara la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos¹²¹.

61. La JS24 y la JS34 observaron que Turquía tenía una de las tasas de matrimonio infantil más altas de Europa, a pesar de que el Código Civil del país fijaba la edad legal para contraer matrimonio en 18 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Recomendaron a Turquía que modificara las disposiciones legales a fin de asegurar que no existieran lagunas legales, como las del artículo 128, y que prohibiera el matrimonio forzado y el matrimonio precoz¹²². La JS34 señaló que los niños refugiados sirios eran vulnerables al matrimonio religioso no oficial¹²³.

62. La Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas (GIEACPC) y la JS48 recomendaron a Turquía que prohibiera los castigos corporales en todos los ámbitos. Instaron a Turquía a que aprobara instrumentos legislativos para prohibir explícitamente esa práctica¹²⁴.

*Personas con discapacidad*¹²⁵

63. La ESHID informó de que Turquía no cumplía muchas de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las políticas sobre discapacidad se fundamentaban en un enfoque médico y caritativo¹²⁶. La ESHID y la JS40 recomendaron a Turquía que armonizara la legislación interna con dicha Convención, y que derogara las disposiciones discriminatorias contenidas en el artículo 74 e) de la Ley núm. 5174 y en el artículo 8 g) de la Ley núm. 2802, así como en otras leyes¹²⁷.

64. La JS40 recomendó a Turquía que abriera todas las instituciones cerradas que acogían a personas con discapacidad, a fin de realizar una supervisión independiente¹²⁸.

65. La JS24 recomendó a Turquía que adoptara, aplicara y supervisara una nueva estrategia integrada y participativa a nivel nacional y provincial, a fin de apoyar la vida independiente de los niños con discapacidad¹²⁹.

*Minorías*¹³⁰

66. Just Atonement Inc. (JAI), la JS30, la International Alliance for Peace and Development (IAPD) y la Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights (MAAT) señalaron que el problema de la opresión de las minorías en Turquía seguía existiendo, especialmente porque muchas minorías étnicas kurdas estaban expuestas a diversas violaciones. Las autoridades turcas aplicaban una serie de políticas contra las minorías, en particular la imposición del idioma estatal, impidiéndoles hablar en su idioma kurdo y discriminándolas en relación con las oportunidades de empleo y en las universidades. Además de la marginación de las zonas kurdas, debido a que no se habían puesto en marcha procesos de desarrollo y rehabilitación, cabía destacar, entre otras cosas, el control asumido sobre 94 municipios kurdos, la suspensión de la democracia local, la prohibición de la libre expresión política, la ausencia de una constitución que garantizara sus derechos básicos y la falta de una cultura de coexistencia. Dichas partes interesadas recomendaron a Turquía que pusiera fin a las prácticas discriminatorias en Diyarbakir¹³¹.

67. La JS30 señaló que a los kurdos también se les impedía el acceso a la educación en su lengua materna en el sistema de enseñanza pública, y que el derecho a emitir programas en sus propios idiomas estaba restringido¹³².

*Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo*¹³³

68. El DÍSK observó que el número de trabajadores refugiados y migrantes era cada vez mayor, a causa del conflicto en Siria y también porque muchos trabajadores emigraban para trabajar en Turquía. Recomendó a Turquía que creara un mecanismo mediante el que los trabajadores migrantes pudieran denunciar las vulneraciones de sus derechos más básicos o los delitos cometidos contra ellos, sin temor a ser deportados, y que asegurara que, con independencia de su situación laboral, pudieran afiliarse a sindicatos o formar asociaciones¹³⁴.

69. El IBAHRC acogió con satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la revocación del efecto suspensivo de los recursos de anulación en los casos de deportación. Recomendó a Turquía que pusiera en práctica las garantías procesales del principio de no devolución¹³⁵.

70. La JS24, HRW y JAI señalaron que Turquía seguía acogiendo al mayor número de refugiados y solicitantes de asilo del mundo, a aproximadamente 3,5 millones de personas. Desde noviembre de 2017, diez provincias habían suspendido el registro de solicitantes de asilo sirios. Un acuerdo sobre migración con la Unión Europea, que ofrecía ayuda a cambio de impedir la emigración a la Unión Europea, había contribuido a la política de larga data de Turquía de cerrar la frontera siria. Dichas partes interesadas informaron que la tasa de trabajo infantil era elevada y que un gran número de niños refugiados y solicitantes de asilo no asistían a la escuela. Recomendaron a Turquía que adoptara políticas para poner fin a las causas fundamentales del trabajo infantil, que incluyeran estrategias de reducción de la pobreza, y que reabriera la frontera con Siria a los solicitantes de asilo y los registrara con prontitud¹³⁶.

*Apátridas*¹³⁷

71. Solidarity with others (OTHERS) y la JS37 informaron de que, en alrededor de 20 países, los ciudadanos turcos habían sufrido violaciones de sus derechos en los consulados, en contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. OTHERS documentó casos de consulados que habían informado a los ciudadanos de que sus pasaportes habían sido cancelados, y habían tratado de convencerlos de que regresaran con documentos de viaje válidos solamente para la ida. Además, los ciudadanos que solicitaron a los consulados la renovación de sus pasaportes, porque estaban vencidos o ya no les quedaban páginas, no pudieron prorrogar o renovar esos documentos. Dado que no se expedían pasaportes ni documentos de identidad a los recién nacidos, esos niños corrían el riesgo de convertirse en apátridas¹³⁸.

72. La JS48 documentó casos de ciudadanos turcos acusados de estar asociados con el “Movimiento Hizmet”, que vivían en el extranjero, y que no pudieron transmitir la ciudadanía a sus hijos debido a la denegación de los servicios consulares. Recomendó a Turquía que otorgara la ciudadanía a todos los hijos de ciudadanos turcos¹³⁹.

73. La JS37 informó de que la falta de cooperación en una investigación penal entrañaba la privación de la nacionalidad, y que los niños nacidos de refugiados sirios corrían el riesgo de ser apátridas. Recomendó a Turquía que expidiera certificados de nacimiento, documentos nacionales de identidad y pasaportes, y que abordara los obstáculos que dificultaban el acceso a la inscripción de los nacimientos¹⁴⁰.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.

*Civil society**Individual submissions:*

AFD	Advocates for Dignity, Geneva (Switzerland);
AHR	Advocates for Human Rights, Minneapolis (United States of America);
AI	Amnesty International, London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
IAPD	The International Alliance for Peace and Development, Geneva (Switzerland);

Akyazili	Stichting Akyazili Nederland, Akyazili, Rotterdam, (Netherlands);
ASOCSOLNAC	Asociacion Educacaion, Social y Cultural Sol Naciente, Lima, (Peru);
AST	Advocate of Silenced Turkey, Wayne NJ. (United States of America);
DİSK	Birleşik Metal İşçileri Sendikası (United Metalworkers' Union), İzmir (Turkey);
BTHRC	Blue Tulip Human Rights Center, Virginia (United States of America);
CSW	Christian Solidarity worldwide, Surrey, New Malden (United Kingdom);
EAJW	The European Association of Jehovah's Witnesses, Kraainem (Belgium);
Embrace Relief	KYM (Kym Yok Mu) Fairfield, NJ, (United States of America);
EPN	European Professionals Network, Brussels (Belgium);
ESHID	Association for Monitoring Equal Rights (AMER)/ (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği - ESHİD), Istanbul (Turkey);
Freemuse	Freemuse, Copenhagen (Denmark);
GIEACPC	Global Initiative to End All Corporate Punishment of Children, London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
Global Unions	International Transport Workers' Federation, (ITUC, ITF, IUF & EI) London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
HRAA	Human Rights Agenda Association (HRAA/iHGD) İzmir (Turkey);
HRFT	Human Rights Foundation of Turkey , Ankara (Turkey);
HRW	Human Rights Watch, Geneva (Switzerland);
Huddled Masses	Huddled Masses, DES PLAINES, IL (United States of America);
IAHRA	International Association for Human Rights Advocacy (IAHRA GENEVA), Geneva (Switzerland);
IBAHRC	Istanbul Bar Association Human Rights Centre , Istanbul (Turkey);
ICAN	International Campaign to abolish nuclear Weapon, Geneva, (Switzerland);
ICJ	International Commission of Jurists, Geneva, (Switzerland);
IFOR	International Fellowship of Reconciliation, Geneva (Switzerland);
IHD/AHD	Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği - İHD), Ankara (Turkey);
ICC	Istanbul Cultural Center GA, Georgia (United States of America);
JAI	Just Atonement Inc. New York (United States of America);
KAGIDER	Women Entrepreneurs Association of Turkey, Istanbul (Turkey);
KYM	KYM, International, Brussels-Haren, (Belgium);
LAG	London Advocacy , London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
MAAT	Maat for Peace, Development and Human Rights, Cairo (Egypt);
MLSA	Media and Law Studies Association, Istanbul (Turkey);
ORF	The Omega Research Foundation, Manchester (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
OTHERS	OTHERS AISBL, Solidarity with others, Brussels (Belgium);
PPJ	Platform for Peace and Justice (PPJ), Brussels (Belgium);
ARI	Hak İnisiyatifi (Association of Rights Initiative) RI-Rights Initiative, Ankara (Turkey);
SAR	Scholars at Risk Network, New York (United States of America);
SCF	Stockholm Center for Freedom, Stockholm (Sweden);
SDuB	The Dialogue and Education Foundation (Stiftung Dialog und Bildung), Berlin, (Germany);
SERA	Foundation SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration / Foundation for Education, Training and Integration), Zürich (Switzerland);
SM	Small Media, London (United Kingdom);
IPN	IPN-Stichting, Integratie and Participate Nieuwkomers, Amsterdam (Netherlands);
STOP RH	Collectif victims de la repression hizmet, Paris (France);
ALI	The arrested lawyers initiative (THE ALI), Brussel (Belgium);
TUSKON EU	TUSKON EU, Zaventem, (Belgium);
VT	Verzwegen Turkije, Capelle aan den Ijssel, Rotterdam (Netherlands);
WITBOEK	Stichting Witboek, Amsterdam (Netherlands).

Joint submissions:

- JS1 **Joint submission 1 submitted by:** Advocates for Justice and Human Rights & Lawyer Rights Watch Initiative, Simpsonville (United States of America);
- JS2 **Joint submission 2 submitted by:** ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey; Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association (Kaos GL); Red Umbrella; Social Policies, Gender Identity, and Sexual Orientation Studies Association (SPoD), Belgrade (Serbia);
- JS3 **Joint submission 3 submitted by:** The Alliance for Shared Values (AfSV); and The Journalists and Writers Foundation (JWF), New York (United States of America);
- JS4 **Joint submission 4 submitted by:** Victim Educators Platform; Human Rights Defenders e.V, Cologne (Germany); and Victim Laborers Platform, Warsaw (Poland);
- JS5 **Joint submission 5 submitted by:** Human Rights Defenders e.V, Cologne (Germany); Victim Educators Platform; and Victim Laborers Platform, Warsaw (Poland);
- JS6 **Joint submission 6 submitted by:** Victim Laborers Platform, Warsaw (Poland); Human Rights Defenders e.V, Cologne (Germany); and Victim Educators Platform;
- JS7 **Joint submission 7 submitted by:** Advocates of Silenced Turkey (AST), New Jersey (United States of America); and Betiad, Brussel (Belgium);
- JS8 **Joint submission 8 submitted by:** Advocates of Silenced Turkey (AST), New Jersey (United States of America); World Affairs Council; Wayne (United States of America);
- JS9 **Joint submission 9 submitted by:** ARTICLE 19, P24, PEN International, English PEN, Reporters Sans Frontiers (RSF), International Press Institute (IPI), Freemuse, Copenhagen (Denmark); European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), IFEX and Norsk PEN, London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS10 **Joint submission 10 submitted by:** Interkultureller Dialog e.V. (ikult e.V.); and Academics at Risk, Cologne (Germany);
- JS11 **Joint submission 11 submitted by:** Forum für Interkulturellen Dialog e.V. (FID) Gerbermühlstraße Frankfurt am Main ; Initiative für Menschenrechte und Freiheit (IHRF) , Frankfurt, (Germany);
- JS12 **Joint submission 12 submitted by:** International Coalition of Legal Organisations; The Law Society of England and Wales; International Bar Association’s Human Rights Institute; Bar Human Rights Committee of England & Wales; Conseil National des Barreaux; European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights; Lawyers for Lawyers; Lawyers’ Rights Watch Canada; Norwegian Bar Association; Human Rights Committee; International Observatory of Endangered Lawyers; Paris Bar, Human Rights Institute; German Bar Association, Human Rights Committee; Geneva Bar Association, Human Rights Commission; Abogacía Española – Consejo General; UIA – International Association of Lawyers, London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS13 **Joint submission 13 submitted by:** The World Evangelical Alliance (WEA), London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Baptist World Alliance (BWA), London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and The *Protestan Kiliseler Derneği* (Association of Protestant Churches – Turkey), Geneva (Switzerland);
- JS14 **Joint submission 14 submitted by:** EPN (European Professionals Network); Others, Schaerbeek, Brussels (Belgium);

- JS15 **Joint submission 15 submitted by:** Human Rights Defenders (HRD), Cologne (Germany); Lilia Platforma Kobiet, Cologne (Germany);
- JS16 **Joint submission 16 submitted by:** Medical Academy and Care envy, Ludwigshafen am Rhein (Germany); Gesellschaft für Dialog BW, Stuttgart (Germany); Die Initiative Miteinander in Esslingen, Esslingen (Germany);
- JS17 **Joint submission 17 submitted by:** The Dialogue and Education Foundation (Stiftung Dialog und Bildung), Berlin, (Germany); and Human Rights Defenders e.V., Cologne (Germany);
- JS18 **Joint submission 18 submitted by:** Human Rights Defenders (HRD), Cologne (Germany); Lilia Platforma Kobiet Cologne (Germany); Victim Laborors Platform, Cologne (Germany);
- JS19 **Joint submission 19 submitted by:** Advocates of Silenced Turkey, Wayne, NJ. (United States of America), Idizem e.V., Munich (Germany), Müriüvvet, Göttingen (Germany);
- JS20 **Joint submission 20 submitted by:** Advocates of Silenced Turkey, (AST), New Jersey (United States of America) and DIALOGUNAMS, Riga, (Latvia);
- JS21 **Joint submission 21 submitted by:** Victim Laborors Platform, (Germany); Human Rights Defenders (HRD), and Victim Educators Platform, Cologne (Germany);
- JS22 **Joint submission 22 submitted by:** The Open Dialogue Foundation (ODF), Warsaw (Poland); The Arrested Lawyers Initiative (ALI); The Human Rights Defenders (HRD), Cologne (Germany);
- JS23 **Joint submission 23 submitted by:** Federation Etude Plus Paris (France); Advocates of Silenced Turkey (AST), New Jersey (United States of America);
- JS24 **Joint submission 24 submitted by:** Partnership Network for Preventing Violence Against Children: 1. Ali İsmail Korkmaz Foundation 2. Mother Child Education Foundation 3. Ankara Bar Association Child Rights Center 4. Ankara Hitit Youth and Sports Club 5. Ankara University Faculty of Medicine Child Protection Center 6. Mother and Infant Health Foundation 7. Başak Culture and Art Foundation 8. Another School is Possible Association 9. Turkish Association for Infant Mental Health 10. Children of One World 11. Bursa Bar Association Child Rights Center 12. İstanbul Bilgi University Children's Studies Unit 13. Civil Society Association in Penal System 14. Association for Supporting Contemporary Life 15. Association for Struggle Against Sexual Violence 16. Child Mental Health and Guidance Association 17. Children Under Same Roof Association 18. Association of Pediatric Nurses 19. Association for Protection of Children, Women and Families Association 20. Child Abuse and Neglect Prevention Association 21. Association for the Support of Child Protection Centers 22. Child Foundation 23. Child and Information Safety Association 24. Diyarbakır Bar Association 25. Down Syndrome Association 26. Union of Educators Solidarity 27. Education Reform Initiative 28. Adolescent Health Association 29. The Idea and Arts Workshop Association 30. Below 25 Association 31. Gaziantep Bar Association Child Rights Center 32. Gazi University Child Protection Center 33. Youth for the Future Association 34. Youth Access Association 35. Young Life Foundation 36. Youth Services Center 37. Migration and Humanitarian Aid Fund 38. Turkish Society of Public Health Specialists 39. Humanist Group Association 40. Support to Life Association 41. Life is in Your Hands Youth Academy Association 42. Human Rights Association 43. İstanbul Bar Association Child Rights Center 44. İzmir Bar Association

- Child Rights Center 45. Development Workshop Cooperative 46. KAMER Foundation 47. Kaos GL Cultural Research Association 48. Black Sea Provinces Women Platform Samsun Association 49. Black Sea Provinces Women Platform Trabzon Association 50. Foster Family, Adoption Association 51. Culture City Foundation 52. Marmara University Child Protection Implementation and Research Center 53. Mor Salkım Women’s Solidarity Association 54. Colourful Hopes Association 55. Children First Association 56. Solidarity with Freedom-Deprived Juvenile 57. Sabanci University Gender Forum 58. Sakarya Bar Children’s Rights Commission 59. SANAD Organization 60. Turkish Society of Social Workers 61. Sulukule Volunteers Association 62. Tarlaşaşı Community Center 63. Tohum Autism Foundation 64. Social Awareness and Anti-Violence Association 65. Social Rights and Research Association 66. Turkish Foundation of Freedom to Children 67. Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry 68. TEGV Educational Volunteers Foundation of Turkey 69. Turkish Education Union 70. Youth Solidarity Association of Turkey 71. Youth Federation of Turkey 72. Children in Need of Protection Foundation of Turkey 73. Turkey Disabled Association 74. Tuvana Education Foundation for Children 75. Psychiatric Association of Turkey 76. Turkish Psychological Counseling and Guidance Association 77. Turkish Psychologists Association 78. TurkMSIC Turkish Medical Student’s International Committee 79. SS. Life Women Environment and Culture Co-Op 80. Flying Baloon Child and Youth Association 81. Flying Broom Women’s Communication and Research Association 82. International Children Center 83. YÖRET-Foundation for Promotion of Guidance and Counselling in Higher Education Network Members: 84. Lawyers Network for Children 85. Network for Combat Commercial Sexual Exploitation of Children – CSEC Network Observer Members: 86. Polatlı Duatepe Education, Culture, Art and Youth Association 87. Child Rights Association 88. Youth Idea Association 89. Malatya Association of Persons Leaving Orphanages 90. Creative Excellent Sustainable Innova, Ankara (Turkey);
- JS25 **Joint submission 25 submitted by:** Universal Rights Association (URA), Pretoria (South Africa); International Association for Human Rights Advocacy in Geneva (IAHRA GENEVA) Geneva (Switzerland); Social Justice Advocacy Campaign (SOJAC); Pretoria (South Africa);
- JS26 **Joint submission 26 submitted by:** International Observatory of Human Rights (IOHR); The Press Emblem Campaign (PEC); London Advocacy (LA), London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS27 **Joint submission 27 submitted by:** Front Line Defenders; International Service for Human Rights (ISHR), Geneva (Switzerland); Kaos GL Cultural Research and Solidarity Association (“Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği”); Truth Justice Memory Center (“Hakikat Adalet Hafıza Merkezi”); Netherlands Helsinki Committee; Association for Monitoring Equal Rights (“Eşit Haklar için İzleme Derneği”); Blackrock, county Dublin (Ireland);
- JS28 **Joint submission 28 submitted by:** Lawyers in Exile Zaventem (Belgium); Universal Rights Association (URA), Pretoria (South Africa);
- JS29 **Joint submission 29 submitted by:** The Advocates for Human Rights; and the World Coalition against the Death Penalty, Minneapolis, (United States of America);

- JS30 **Joint submission 30 submitted by:** London legal group; The Turkey Human Rights Litigation Support Project, London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS31 **Joint submission 31 submitted by:** European Baptist Federation (EBF), Baptist World Alliance (BWA), Amsterdam (Netherlands); London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS32 **Joint submission 32 submitted by:** Human Rights Institute for Peace and Freedom; La Plataforma Pro Derechos y Libertades, Madrid (Spain);
- JS33 **Joint submission 33 submitted by:** ADF International, Geneva (Switzerland); Southern Baptist Ethics & Religious Liberty Commission ; International Religious Freedom Roundtable ; Religious Freedom Institute ; Jubilee Campaign ; In Defense of Christians ; Russian Orthodox Autonomous Church of America ; Red Eagle Enterprises ; National Youth Council of Nigeria ; Plateau State Youth Council ; Citizen Power Initiatives for China ; Center for Pluralism ; International Christian Concern ; Law and Liberty International ; The Council of The Ethnic Peoples and Religions of Vietnam ; Human Rights Without Frontiers (Brussels) ; International Christian Foundation for Democracy ; Faith & Liberty ; The Association Against Religious Persecution ; The Good Friday National Holiday Campaign ; International Committee on Nigeria ; Advocates for the Nation, Nepal ; Institute on Religion and Democracy ; Junior Sacerdotal Council of Caodai Religion; and St. Charles Institute, Geneva (Switzerland);
- JS34 **Joint submission 34 submitted by:** Network Against Commercial Sexual Exploitation of Children/ECPAT Turkey Ankara (Turkey); and ECPAT International, Bangkok (Thailand);
- JS35 **Joint submission 35 submitted by:** Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, Ottawa (Canada); and Youth Approaches To Health Association (Y-PEER Turkey) Ankara (Turkey);
- JS36 **Joint submission 36 submitted by:** Platform for independent journalism (P24); Istanbul (Turkey); and Freemuse, Copenhagen (Denmark);
- JS37 **Joint submission 37 submitted by:** Institute on Statelessness and Inclusion; and European Network on Statelessness, Eindhoven (Netherlands);
- JS38 **Joint submission 38 submitted by:** Mangfaldhuset, Oslo (Norway); Hand in hand for women; Dialogslussen, Gothenburg (Sweden); Plattformen, Stockholm (Sweden);
- JS39 **Joint submission 39 submitted by:** Foundation for Society and Legal Studies (TOHAV); Lawyers for Freedom Association (LFA) ; Civil Society in the Penal System (CISST); Beyoglu/Istanbul, (Turkey);
- JS40 **Joint submission 40 submitted by:** Human Rights Joint Platform (IHOP), Ankara (Turkey); Association for Monitoring Equal Rights; Rights Initiative Association (ARI); Human Rights Association; Human Rights Agenda Association; Citizens Association; Amnesty International Turkey, Istanbul (Turkey);
- JS41 **Joint submission 41 submitted by:** Norwegian Helsinki Committee; The Freedom of Belief Initiative (İnanç Özgürlüğü Girişimi); Oslo, (Norway); and Forum 18, Oslo (Norway);
- JS42 **Joint submission 42 submitted by:** SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration / Foundation for Education, Training and Integration Zürich, (Switzerland); and IAHR Geneva (International Association for Human Rights Advocacy in Geneva) Geneva (Switzerland);
- JS43 **Joint submission 43 submitted by:** SERA (Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Integration / Foundation for Education, Training and Integration), Zürich, (Switzerland);

- and IAHR Geneva, International Association for Human Rights Advocacy, Geneva (Switzerland);
- JS44 **Joint submission 44 submitted by:** EuroMed Rights; Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği - İHD) Ankara, (Turkey); Citizens Assembly – Yurttaşlık Derneği, Copenhagen (Denmark);
- JS45 **Joint submission 45 submitted by:** International Association for Human Rights Advocacy (IAHRA GENEVA) Genève (Switzerland); ; London Advocacy (LAG); London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS46 **Joint submission 46 submitted by:** The Arrested Lawyers Initiative (ALI), Brussel (Belgium); and the London Advocacy (LAG) ; London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS47 **Joint submission 47 submitted by:** Coalition of NGOs Mozambique, Foundation Marcelino Dos Santos; Peace Islands Association; Association Development of Investments and Businesses, Maputo (Mozambique);
- JS48 **Joint submission 48 submitted by:** Human Rights Defenders (HRD), Cologne (Germany); London Advocacy (LAG), London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);
- JS49 **Joint submission 49 submitted by:** La Plataforma Pro Derechos y Libertades; Human Rights Institute for Peace and Freedom, Madrid (Spain).

Regional intergovernmental organization(s):

- CoE The Council of Europe, Strasbourg (France);
- Attachments:**
 (CoE-Commissioner Commissioner for Human Rights)
 Council of Europe Commissioner for Human Rights,
 Memorandum on freedom of expression and media freedom in Turkey, and Memorandum on the Human Rights Implications of Anti-Terrorism Operations in South-Eastern Turkey, following a visit to Turkey from 6 to 14 April 2016.
 Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state of emergency in Turkey, following a visit to Ankara between 27 and 29 September 2016;
 GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) Turkey, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO),
 GREVIO/Inf(2018)6 and Recommendation on the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence by Turkey, The Committee of the Parties to the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, IC-CP/Inf(2019)2; (CoE-GRECO) – Group of States against Corruption, Fourth Evaluation Round, Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors, Adopted by GRECO at its 77th Plenary Meeting, GrecoRC4(2017)16; European Committee of Social Rights Conclusions 2018, Turkey, March 2018; European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Opinion on the Provisions of the Emergency Decree Law N° 674 Of 1 September 2016 Which Concern The Exercise Of Local Democracy In Turkey, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session, (Venice, 6-7 October 2017), CDL-AD(2017)021; and Opinion on the amendments to the Constitution adopted by the Grand National Assembly, On 21

January 2017, and to be submitted to a National Referendum on 16 April 2017, adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session, (Venice, 10-11 March 2017) No. 875/2017, CDL-AD(2017)005; and Opinion on Emergency Decree Laws Nos. 667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016 Adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session (Venice, 9-10 December 2016), No. 865 / 2016, CDL-AD(2016)037; Opinion on the suspension of the second paragraph of Article 83 of the Constitution (Parliamentary Inviolability) Adopted by the Venice Commission at its 108th Plenary Session (Venice, 14-15 October 2016), No. 858 / 2016, CDL-AD(2016)027; and Opinion on the Legal Framework Governing Curfews adopted by the Venice Commission at its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016), No. 842 / 2016, CDL-AD(2016)010; and Opinion on the measures provided in the recent Emergency Decree Laws with respect to freedom of the media adopted by the Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017), No. 872 / 2016, CDL-AD(2017)007; and Opinion on Law No. 5651 On regulation of publications on the internet and combating crimes committed by means of such publication (“THE INTERNET LAW”) adopted by the Venice Commission at its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016), No. 805 / 2015, CDL-AD(2016)011; and OPINION ON ARTICLES 216, 299, 301 AND 314 of the Penal Code of Turkey, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016), No. 831/2015, CDL-AD(2016)002; Opinion on the Duties, Competences and Functioning of the Criminal Peace Judgeships adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017), No. 852 / 2016, CDL-AD(2017)004; and European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), Turkey Joint Opinion on Amendments to the electoral legislation and related “Harmonisation Laws” adopted in March and April 2018, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 64th meeting (Venice, 13 December 2018) and by the Venice Commission at its 117th Plenary Session (Venice, 14-15 December 2018), Venice Commission Opinion No. 926/2018, ODIHR Opinion No. ELE-TUR/340/2018, CDL-AD(2018)031; (CoE-CPT) Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 28 to 29 April 2016, CPT/Inf (2018) 11; and Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 23 June 2015, CPT/Inf (2017) 32; (CoE-ECRI) European Commission against Racism and Intolerance report, ECRI Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Turkey subject to interim follow-up adopted on 3 April 2019, CRI(2019)27; ECRI Report on Turkey (fifth monitoring cycle), Adopted on 29 June 2016, CRI(2016)37.

OSCE-ODIHR

Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in Europe, Warsaw (Poland).

² The following abbreviations are used in UPR documents:

ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

OP-ICESCR	Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1	Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2	Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty;
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
OP-CEDAW	Optional Protocol to CEDAW;
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT	Optional Protocol to CAT;
CRC	Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC	Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict;
OP-CRC-SC	Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC	Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD	Optional Protocol to CRPD;
ICPPED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

³ For the relevant recommendations, see A/HRC/29/15, paras, 148.1–5, 148.52–55, 149.1–2, 149.12 and 150.1–10, 151.1–11, 151.21 and 151.26–27.

⁴ ARI, page 4, HRFT, page 3, ICJ, page 4, LAG, page 6, JS3, page 16, JS32, page 11, JS40, page 8 and JS42, page 8.

⁵ ICJ, page 4 and HRAA, page 4.

⁶ HRAA, page 4, HRW, page 5, ICJ, page 4, JS3, page 16 and JS48, page 2.

⁷ HRAA, page 4.

⁸ JS3, page 16 and JS45, page 11.

⁹ HRW, page 6, JS40, page 10 and JS45, page 11.

¹⁰ ICAN, page 1.

¹¹ ECRI_2016_37_Turkey.pdf, para 2

¹² HRW, page 6, ESHID, page 4 and JS33, page 12.

¹³ ESHID, page 4, HRAA, page 4 and JS3 page 16.

¹⁴ HRAA, page 4, HRW, page 8 and JS48, page 8.

¹⁵ JS37, page 7.

¹⁶ KYM, page 9.

¹⁷ SERA, page 5 and JS22, page 10.

¹⁸ For the relevant recommendations, see A/HRC/29/15, paras, 148.6–7, 148.9, 148.18, 148.20–27, 148.29, 148.31–33, 148.37–38, 148.50–51, 148.81, 149.11 and 150.29.

¹⁹ AI, page 1.

²⁰ AI, page 1, CSW, page 1, ICJ, page 2 and 4, LAG, pages 3 and 7, PPJ, page 8, Witboek, page 1, JS3 pages 1-3 and 17, JS9, page 1, JS12, pages 1-2, JS20, page 11, JS36, pages 3-4 and 20, JS40, page 3, JS46, page 4.

²¹ AHD/IHD page 6, HRW, pages 4-5, HRFT, page 2, JS2, page 5 and 14 and JS45, page 3. See also A/HRC/29/15, 13 April 2015, paragraphs 148.20, 148.23–148.26.

²² ECRI_2019_27_Turkey.pdf, page. 7.

²³ AHD/IHD page 6, HRAA, page 4, HRW, pages 4-5, HRFT, page 2, IAPD, pages 4 and 7-8, MAAT, page 6, JS39, page 10 and JS42, page 8.

²⁴ ECRI_2016_37_Turkey.pdf, para. 95.

²⁵ JS8, page 7 and JS39, pages 2-3. See also A/HRC/29/15, paras. 148.50 and 149.2.

²⁶ For the relevant recommendations, see A/HRC/29/15, paras, 148.10, 148.16–17, 148.18, 148.56, 148.131, 148.148–149, 150.12, 150.24–28 and 150.30–34.

²⁷ JS30, page 4.

²⁸ ECRI_2016_37_Turkey.pdf, paras. 38 and 88.

²⁹ ESHID, page 3 and JS2, pages 1-2. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, A/HRC/29/15, 13 April 2015, paragraphs 148.16–148.17, 150.24–150.25, 150.27, 150.30, 150.32, 150.34, 150.46.

³⁰ HRW, pages 3-4 and JS8, page 7.

³¹ ECRI_2016_37_Turkey.pdf, paras. 11, 27 and 105.

³² OSCE/ODIHR, pages 4-5. HRW, pages 3-4 and JS8, page 7.

- ³³ JS2, pages 13-14 and JS27, page 11.
- ³⁴ For the relevant recommendations, see A/HRC/29/15, paras. 148.62.
- ³⁵ AFD, page 5-6, BTHRC, page 3, Global Unions (ITF), pages 2, 4-6, JS6, pages 1 and 4, JS7, page 7, JS10, pages 2-5, JS18, pages, 2-6, JS21, pages 8, 10-12, JS44, page 6, JS46, pages 2-3 and IPN, pages 2-7 and 8. As of May 2019, 126,600 applications had been made, of which 70,406 had been reviewed and only 5,250 had led to a reinstatement. 65,156 complaints were rejected and 55,714 applications were pending.
- ³⁶ BTHRC, page 3 and JS7, page 7.
- ³⁷ Embrace Relief, page 4 and KYM, page 9.
- ³⁸ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 149.46, 150.22, 150.52, and 151.24–25.
- ³⁹ AI, page 1-5 and 7.
- ⁴⁰ CommDH_2017_29_Turkey.pdf, para 44 and CommDH_2017_13_Turkey.pdf, para. 42 and CommDH_2017_5_Turkey.pdf, para. 136.
- ⁴¹ AHR, page 6, AHD/IHD pages 3 and 6, STOP RH, pages 1-3, JS4, pages 1 and 2-3, JS9, pages 3-4, JS12, pages 2, 7-8 and 12, JS22, page 11, JS26, pages 10-13, JS29, pages 1,2 and 5, JS33, pages 2-9, JS36, pages 20-21, and JS44 pages 8-10. Article 7(2) of the Anti-Terrorism Law prescribes one to five years' imprisonment for those who make 'propaganda of a terrorist organization by justifying or praising or inciting the terrorist organizations'. The provision also increases the punishment by half for "propaganda" expressed via press and publication. Decree No. 667 (23 July 2016) enabled the confiscation of passports of anyone under investigation of terrorism or posing a threat to national security, and, following the issuance of Decree No. 672 of 24 October 2016, their spouses and partners. It further allowed for communications between detainees and their legal counsel to be monitored at the request of prosecutors, and for legal counsel to be replaced by the authorities. Decrees No. 668 (27 July 2016), extended the period under which individuals could be detained without charge from 48 hours to 30 days (later reduced to 12 days) and restricted detainees' access to legal counsel, including by extending the period before which they must have access to a lawyer to five days. It granted law enforcement extensive powers to search properties, including law firms, without prior judicial authorization, and to confiscate broadly defined suspicious materials.
- ⁴² AHR, page 6, AHD/IHD pages 2-3 and 6, AI, page 6, Freemuse, pages 5 and 7, ICJ, page 4, MAAT, page 6, MLSA, pages 3 and 8, STOP RH, pages 1-3, JS3, pages 15 and 17, JS4, pages 2-3, JS8, page 7, JS12, 7-8 and 11, JS22, page 11, JS26, pages 10-13, JS9, pages 3-4, JS27, page 10, JS29, pages 1,2 and 5, JS30, pages 6, 13, JS33, pages 2-9, JS36, pages 12, 20-21 and 17 and JS44, page 8-10 and 12. CommDH_2017_5_Turkey.pdf, para 136
- ⁴³ IBAHRC, page 1.
- ⁴⁴ CommDH_2017_29_Turkey.pdf, paras. 44 and CommDH_2017_13_Turkey.pdf, para. 42 and CommDH_2017_5_Turkey.pdf, para. 136.
- ⁴⁵ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.11–12, 148.15, 148.19, 148.41, 148.83–86, 148.90–94, 148.102, 148.111, 148.152, 149.6, 149.8–9, 149.11, 149.21, 149.27, 149.31 and 150.11.
- ⁴⁶ JS29, pages 1,2 and 5.
- ⁴⁷ HRFT, pages 1-2, IHD, pages 1-2, and JS30, pages 5-7 and 17.
- ⁴⁸ CommDH_2016_39_Turkey.pdf, para 127
- ⁴⁹ ECRI_2016_37_Turkey.pdf, para 50, para. 83.
- ⁵⁰ JS32, pages 5-11 and JS42, pages 5-8.
- ⁵¹ AFD, page 3-4, JS4, page 8 and JS12, pages 11-12 and 6.
- ⁵² HRFT, pages 4-6.
- ⁵³ AHR, pages 2 and 6, AI, page 6 and 8, HRW, pages 4-5, IAHR, pages 1-2 and 6, IAPD, pages 6 and 7, IBAHRC, page 5, STOP RH, pages 1-3 and JS3, pages 5-8 and 16-17. IAHR stated that according to data published by the Ministry of Justice, in Turkey, the so-called FETO / PDY integration and management and related offenses in total, 441195 persons were concerned by the operation, of whom 89718 were women and 351477 men. Moreover, Turkey 5315 prisoners throughout the investigation 203518 persons, 16195 to 83722 persons under arrest for the ongoing proceedings in the courts; a total of 34926 persons were convicted of a crime; Of the 13992 persons who had been acquitted, 12,617 were reported to be still in detention.
- ⁵⁴ SM, page 2.
- ⁵⁵ AHR, page 6, JS4, page 9, JS12, pages 1, 4 and 11, and JS39, page 6-7.
- ⁵⁶ AHR, page 3, AFD, page 5-6, IAPD, pages 6 and 7 and JS4, pages 5 and 7-9.
- ⁵⁷ AFD, page 5-6, ALI, pages 2-4 and 11-12, and JS12, pages 1 and 4.
- ⁵⁸ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.36, 148.104–107, 148.109, 148.130, 149.3, 149.22–32, 150.7–8 and 150.11.
- ⁵⁹ AFD, pages 3-4 and 6, ICJ, page 4, JS3, pages 16-17, JS28, pages 2-5 and 10, JS30, page 17, JS40, pages 4 and 8 and JS42, page 8, LAG, pages 3 and 6, STOP RH, page 4 and OSCE/ODIHR, page 6.
- ⁶⁰ CommDH_2016_39_Turkey.pdf, para 126

- ⁶¹ AFD, page 5-6, IPN, pages 2-8, JS3, pages 10-11, JS7, page 2-6, JS9, page 2, JS10, pages 2-5, JS15, pages 2 and 6, JS18, pages 2-6, JS21, pages 10-12, JS32, page 1 and JS46, pages 2-5.
- ⁶² CDL-AD_2016_037_Turkey.pdf, para 227
- ⁶³ JS25, page 14.
- ⁶⁴ AFD, pages 4-6, PPJ, page 2, JS17 page 2, and JS49, pages 3-5.
- ⁶⁵ AFD, page 4-6, AHR, pages 3-6, AI, page 1-3 and 6, CSW, page 1, Huddled Masses, pages 8 and 12, IBAHRC, page 5, MLSA, pages 7-8, IAPD, pages 6 and 7, ICJ, pages 1-2 and 4, LAG, pages 3 and 7, PPJ, pages 2-4 and 8, VT, page 6, JS1, page 2-3, JS3, pages 2-3, 7-8, and 17, JS8, page 7, JS9, pages 1-2 and 6-9, JS12, pages 1-3, JS17 page 2, JS25, page 4-7, JS27, pages 10-11, JS30, pages 12-13 and 17, JS36, pages 3-4 and 20, JS40, page 3, JS43, pages 4-5, JS46, page 4, and JS49, pages 2-5. See A/HRC/29/15, paras. 149.22, 149.23, 149.24 149.25, 149.26, 149.28, and 149.29 – supported.
- ⁶⁶ ICJ, page 4 and PPJ, page 8.
- ⁶⁷ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.14, 148.106, 148.114–128, 149.5, 149.10, 149.34–39, 149.40–43, 150.13, 150.15–16, 150.18–19, 150.22–23, 150.35, 150.37–38, 150.41, 150.39–40, 150.43–45, 150.47, 150.52, 151.12–15 and 151.19.
- ⁶⁸ JS4, page 1, JS12, pages 2 and 12, and JS33, pages 2-9. Article 7(2) of the Anti-Terrorism Law prescribes one to five years' imprisonment for those who make 'propaganda of a terrorist organization by justifying or praising or inciting the terrorist organizations'. The provision also increases the punishment by half for "propaganda" expressed via press and publication. Decree No. 667 (23 July 2016) enabled the confiscation of passports of anyone under investigation of terrorism or posing a threat to national security, and, following the issuance of Decree No. 672 of 24 October 2016, their spouses and partners. It further allowed for communications between detainees and their legal counsel to be monitored at the request of prosecutors, and for legal counsel to be replaced by the authorities. Decrees No. 668 (27 July 2016), extended the period under which individuals could be detained without charge from 48 hours to 30 days (later reduced to 12 days) and restricted detainees' access to legal counsel, including by extending the period before which they must have access to a lawyer to five days. It granted law enforcement extensive powers to search properties, including law firms, without prior judicial authorization, and to confiscate broadly defined suspicious materials.
- ⁶⁹ JS31, page 2 and JS41, page 3.
- ⁷⁰ JS40, p. 10-11.
- ⁷¹ CSW, pages 1-2 and 4-5. EAJW, pages 3 and 8, JS13, pages 2, 7-8, JS31, pages 2-3 and 5, JS33, pages 2-9 and 12, JS41, pages 4-5, and JS45, pages 3-7 and 11. See also A/HRC/29/15 paras. 148.126 Angola, 149.41 France, 151.12 Croatia, 151.13 Germany, 151.14 Slovenia. See also accepted recommendations 148.56 from Singapore, and recommendation 148.36 from Italy. Turkey rejected Austria (151.22.) and Canada's (151.21). UK (150.47) and Australia (150.35).
- ⁷² ECRI_2016_37_Turkey.pdf, para 91.
- ⁷³ AI, page 1-5 and 7, IFOR, page 1-6, EAJW, pages 3 and 8, JS41, pages 3-4, JS45, page 11 and JS31, pages 2-3 and 5. See also A/HRC/29/15 paras. 148.126 Angola, 149.41 France, 151.12 Croatia, 151.13 Germany, 151.14 Slovenia.
- ⁷⁴ AFD, page 2 and 6, JS40, page 8, IAPD, page 2-3, JS21, page 2, SCF, pages 5-6 AI, page 1 JS9, pages 1, 5-6, JS26, pages 1-5, 7 and 13, JS27, page 1, JS29, pages 1,2 and 5, JS44, pages 7-8, SCF, pages 3-6 and 8 and CSW, pages 5-7. Accepted recommendations from Latvia (148.114) Luxembourg (148.116), USA (148.117), Austria (148.118), Norway (149.34), and Republic of Korea (150.16). See also JAI, pages 2-3 and 7.
- ⁷⁵ CDL-AD_2017_007_Turkey.pdf, para. 57.
- ⁷⁶ AHD/IHD pages 2-3 and 6, AHR, page 6, CSW, page 7, Freemuse, pages 5 and 7, MLSA, pages 3 and 8, JS4, pages 2-3, JS9, pages 3-4, JS12, pages 7-8, JS22, page 11, JS26, pages 10-13, JS27, page 10, JS29, pages 1,2 and 5, JS36, pages 20-21, JS44, pages 7-10, CommDH_2017_5_Turkey.pdf, para 124 and AI, page 1-5 and 7 and CDL-AD_2016_002_Turkey.pdf, para. 126.
- ⁷⁷ Freemuse, pages 5-6, IAPD, pages 2-3 and 7, JS9, pages 9-10, and JS26, pages 10-13.
- ⁷⁸ Global Unions (ITF), pages 2, 4-6, JS5, page 8, JS6, pages 1-2 and 4 and JS21, page 8.
- ⁷⁹ JS44, page 6.
- ⁸⁰ KYM, pages 5-7 and 9.
- ⁸¹ CommDH_2018_30_Turkey.pdf, para. 45.
- ⁸² SDuB, pages 3-4 and 7-8.; See also OSCE/ODIHR, page 7.
- ⁸³ ORF, page 4. (A/HRC/29/15 – 149.38 Norway, 149.41, France; 148.123, Costa Rica; 148.124, Botswana; 149.36, Germany; 149.35, Austria; 149.39, Czech Republic; 150.23, Ireland.
- ⁸⁴ ESHID, pages 9-10.
- ⁸⁵ OSCE/ODIHR, pages 1-3.
- ⁸⁶ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.11–148.15, 148.19, 148.83–94 and 148.152.
- ⁸⁷ JS34, pages 2-4 and 6-10.

- ⁸⁸ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.28, 148.42, 148.98–100, 148.103, 149.19–20, 150.14, 150.16, 150.17, 150.20–21 and 150.42
- ⁸⁹ BTHRC, page 3 and JS7, page 4.
- ⁹⁰ LAG, page 6 and JS26, page 13.
- ⁹¹ SM, pages 5-7.
- ⁹² For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.57, 148.80, 148.13–133 and 149.1.
- ⁹³ AFD, page 5-6, AI, pages 4 and 7, ASOCSOLNAC, pages 2-7, EPN, pages 1-3, VT, page 6, JS3, pages 2-3 and 15, and JS40, page 12.
- ⁹⁴ AI, pages 4 and 7, ASOCSOLNAC, pages 2-7, EPN, pages 1-3, ICJ, page 2 and 5, JS3, pages 2-3 and 15, and JS44, page 12.
- ⁹⁵ ASOCSOLNAC, page 11, BTHRC, page 3, ICC, pages 1-3, JS3, pages 2, 11 and 17, JS14, pages 1-5 and 7-8. JS23, page 13.
- ⁹⁶ DİSK, pages 3-4.
- ⁹⁷ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, para 148.147.
- ⁹⁸ JS38, pages 1-9.
- ⁹⁹ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.113 and 148.149.
- ¹⁰⁰ JS3, pages 10-11, JS21, page 1 and JS46, pages 4-5.
- ¹⁰¹ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.64 and 148.143.
- ¹⁰² JS21, page 1.
- ¹⁰³ JS3 pages 11-12.
- ¹⁰⁴ JS35, pages 4-5 and 8.
- ¹⁰⁵ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.134–146, 149.45 and 151.6–7.
- ¹⁰⁶ Witboek, page 1.
- ¹⁰⁷ SAR, pages 1-3 and JS43, pages 5-7. The petition was initially signed by 1,128 academics from 89 Turkish universities, and more than 300 scholars from outside Turkey. (The total number of signatories eventually reached 2,212.) See A/HRC/29/15 recommendation 148.117 (United States of America) and recommendation 150.52 (Netherlands).
- ¹⁰⁸ Akyazili, pages 1 and 6, AST, pages 2-4 and 8-9, FD, page 5-6, IPN, pages 2-8, and 8, SAR, pages 1-3, VT, page 6, JS3, pages 10-11, JS5 pages 3 and 7, JS7, page 2-6, JS9, page 2, JS10, pages 2-5 and 8, JS11, pages 2 and 8, JS15, pages 2 and 6, JS16, pages 3-6, JS18, pages, 2-6, JS19 pages 7 and 9, JS20, pages 4, 8 and 11, JS21, pages 2-4 and 10-12, JS23, pages 7-10, JS32, page 1, and JS46, pages 2-5.
- ¹⁰⁹ AFD, page 5-6, IPN, pages 2-7 and 8, JS10, pages 2-5, JS16, pages 3-6, JS18, pages, 2-6, JS20, page 2-3, JS23, pages 7-10, JS21, pages 10-12 and JS46, pages 2-3.
- ¹¹⁰ JS24 page 12.
- ¹¹¹ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.13, 148.29, 148.40, 148.46–47, 148.57–69, 148.71–74, 148.79–80, 148.95–98, 148.101–112, 148.129, 148.133, 149.6–7, 149.13–14, 149.18, 149.44, 150.26 and 151.16–17.
- ¹¹² AFD, page 5-6, AHD/IHD, pages 4-6, STOP RH, page 2, JS3, page 17, JS8, page 2 and 6-7, JS4, pages 7-8, JS47, pages 5 and 8 and JS48, pages 4-6 and 8.
- ¹¹³ IC-CP_inf_2019_2_Turkey.pdf, page 2.
- ¹¹⁴ GREVIO_Inf_2018_3_Turkey.pdf, para 282a GREVIO_Eval_rep_Turkey.pdf, para. 42a.
- ¹¹⁵ HRW, p. 7, KAGIDER, pages 1-5 and 8-10 and JS40, pages 6 and 9.
- ¹¹⁶ KAGIDER, pages 1-5 and 8-10.
- ¹¹⁷ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.1–4, 148.28, 148.34–35, 148.39, 148.42–44, 148.48–49, 148.82, 148.86–89, 148.99–102, 148.103, 148.108, 148.110–111, 148.113, 148.134, 148.137, 149.16–17 and 149.19–20.
- ¹¹⁸ JS47, page 7.
- ¹¹⁹ JS24, page 9 and JS48, page 8.
- ¹²⁰ JS24, pages 2 and 4, JS34, pages 8-9 and JS48, page 1 and 8.
- ¹²¹ JS48, page 1 and 8.
- ¹²² JS24, pages 6-7 and JS34, pages 2-4 and 6-10.
- ¹²³ JS34, page 5.
- ¹²⁴ GIEACPC, page 1 and JS48, pages 3 and 8. See also A/HRC/29/15, paras. 149.16 (Poland); and 149.17 (Slovenia).
- ¹²⁵ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.1, 148.4, 148.140–149 and 150.26.
- ¹²⁶ ESHID, pages 6-7.
- ¹²⁷ ESHID, pages 6-7 and JS40, p. 10.
- ¹²⁸ JS40, p. 10.
- ¹²⁹ JS24, page 9-10.
- ¹³⁰ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.78, 148.148–156, 149.4–5, 149.15, 149.33, 149.40, 150.26, 150.35–37, 150.46–49, 151.8 and 151.20–23.
- ¹³¹ IAPD, pages 5 and 7, JAI, pages 6 and 8, MAAT, pages 5-6 and JS30, pages 5-7 and 17.

¹³² JS30, page 4.

¹³³ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.85, 148.152–153, 149.1, 149.12, 149.45, 150.26, 150.47 and 150.50–51.

¹³⁴ DİSK, pages 5-6.

¹³⁵ IBAHRC, page 5.

¹³⁶ HRW, p. 7-8, JAI, pages 6-8 and JS24, pages 7-8.

¹³⁷ For relevant recommendations see A/HRC/29/15, paras. 148.35, 148.39, 148.44, 148.49, 148.89, 148.92 and 148.110.

¹³⁸ OTHERS, pages 3-4-9 and JS37 pages 3-7.

¹³⁹ JS48, page 7-8.

¹⁴⁰ JS37 pages 3-7.
